



---

# FGR

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

---

COMITÉ DE TRANSPARENCIA<sup>1</sup>

**TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN  
ORDINARIA 2021  
5 DE OCTUBRE DE 2021**

---

<sup>1</sup> En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



## CONSIDERACIONES

Los días 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Tras ello, el pasado 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.

Por ello, en consideración a lo previsto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto del Decreto aludido, que citan:

**Segundo.** Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

**Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.**

**Tercero.** Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Especializadas, el **Órgano Interno de Control y las demás personas titulares de las unidades administrativas**, órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del proceso pendiente.

**Cuarto.** La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera.

**En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.**

**Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República se entenderán como vigentes** y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las





partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados.

...  
**Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades competentes**, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto.

En relación con el artículo 97 del Decreto en mención, que señala:

**TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CAPÍTULO ÚNICO  
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN**

Artículo 97. Las bases de datos, sistemas, registros o archivos previstos en la presente Ley que contengan información relacionada con datos personales o datos provenientes de actos de investigación, recabados como consecuencia del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General o por intercambio de información con otros entes públicos, nacionales o internacionales, podrán tener la calidad de información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo caso únicamente podrán ser consultadas, revisadas o transmitidas para los fines y propósitos del ejercicio de las facultades constitucionales de la Fiscalía General, por las personas servidoras públicas previamente facultadas, salvo por aquella de carácter estadístico que será pública.

Lo anterior, en correlación con los artículos 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

**Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República** para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

**Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría**, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas** y órganos desconcentrados siguientes:

...

Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos**.

...

**Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas** y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador**.



La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

De lo expuesto, se concluye que en tanto **no se defina el nuevo estatuto de Fiscalía General de la República**, el Comité de Transparencia con el fin de seguir cumplimentando las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables en la materia, el citado Órgano Colegiado continuará sesionando conforme lo establece el ya citado Acuerdo A/072/16.

Atento a lo anterior, cualquier referencia a la entonces Procuraduría General de la República, se entenderá realizada a la ahora Fiscalía General de la República.

Por otra parte, es importante puntualizar que con motivo de la emergencia sanitaria a nivel internacional, relacionada con el evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública a través de la propagación del virus SARS-COVID2 y que potencialmente requiere una respuesta coordinada, es que desde el pasado viernes 20 de marzo en cumplimiento con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, se emitió el protocolo y medidas de actuación en la Fiscalía General de la República, por la vigilancia epidemiológica del Coronavirus COVID-19 para la protección de todas y todos sus trabajadores a nivel nacional y público usuario, en el sentido de que en la medida de lo posible se dé continuidad operativa a las áreas sustantivas y administrativas de esta institución, tal como se aprecia en el portal institucional de esta Fiscalía:

<https://www.gob.mx/fgr/articulos/protocolo-y-medidas-de-actuacion-ante-covid-19?idiom=es>

En ese contexto, en atención al Protocolo y medidas de actuación que han sido tomadas en cuenta por diversas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República con motivo de la pandemia que prevalece en nuestro país, documentos emitidos el 19 y 24 de marzo del año en curso, respectivamente, por el Coordinador de Planeación y Administración, es importante tomar en cuenta el contenido de lo del artículo 6, párrafo segundo del *Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, el cual señala que:

**Artículo 6.** Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.

La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología**, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

En concatenación, con el numeral cuarto, fracciones I y II del Oficio circular No. C/008/2018, emitido por la entonces Oficina del C. Procurador, a saber:

**CUARTO.** Se les instruye que **comuniquen al personal adscrito o bajo su cargo que implementen, en el ejercicio de sus funciones, las siguientes directrices:**





**II. Priorizar el uso de correos electrónicos como sistema de comunicación oficial** al interior de la Institución;

Así como lo escrito en el Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias en donde se amplíe el término para dar respuesta signado por el Comité de Transparencia en su Novena Sesión Ordinaria 2019 de fecha 5 de marzo de ese año y el **Procedimiento para recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), susceptible de revisión por parte del CT** aprobado por ese Colegiado el fecha 22 de junio de 2018, a través del cual se instituyeron diversas medidas de atención, entre las cuales, destaca el siguiente: **"5. Que excepcionalmente, se recibirán correos electrónicos enviados en tiempo y forma fundados y motivados, como adelanto a sus pronunciamientos institucional"**, es que, el personal de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, **únicamente gestionará a través de correos electrónicos institucionales , hasta nuevo aviso, todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación** establecidos en la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos, así como procedimientos de investigación y verificación, de imposición de sanciones y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, **así como diversos asuntos competencia de esta Unidad en la medida en que sus posibilidades técnicas, materiales y humanas lo permitan, hasta en tanto, no se tenga un comunicado por parte de las autoridades sanitarias que fomenten el reinicio de las actividades de manera presencial.**

## INTEGRANTES

**Lcda. Adi Loza Barrera.**

**Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.**

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).



**Lic. Carlos Guerrero Ruíz.**

**Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Fiscalía General de la República.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina.**

**Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción X y 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como los ACUERDOS: A/009/2019 por el que se instala el Órgano Interno de Control, el A/014/2019 por el que se crean las unidades administrativas del Órgano Interno de Control y Numeral SEGUNDO, fracción IV, inciso c) del A/OI/001/2019 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control entre sus unidades administrativas, publicados en el DOF el 14 de diciembre de 2018, 9 de mayo y 25 de septiembre de 2019, respectivamente.





### **SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

Siendo las 00:16 horas del día 2 de octubre de 2021, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia remitió vía electrónica a los enlaces de transparencia, en su calidad de representantes de las Unidades Administrativas (UA) competentes, los asuntos que serán sometidos a consideración del Comité de Transparencia en su Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 2021 a celebrarse el día 5 de octubre de 2021, por lo que requirió a dichos enlaces, para que de contar con alguna observación al respecto, lo hicieran del conocimiento a esta Secretaría Técnica y que de no contar con un pronunciamiento de su parte, se daría por hecho su conformidad con la exposición desarrollada en el documento enviado.

Lo anterior, con el fin de recabar y allegar los comentarios al Colegiado, a efecto de que cuente con los elementos necesarios para emitir una determinación a cada asunto.

En ese contexto, tras haberse tomado nota de las observaciones turnadas por parte de las UA, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia notificó a los integrantes del Comité de Transparencia la versión final de los asuntos que serían sometidos a su consideración, con las respectivas propuestas de determinación.

Derivado de lo anterior, tras un proceso de análisis a los asuntos, los integrantes del Comité de Transparencia emitieron su votación para cada uno de los casos, por lo que, contando con la votación de los tres integrantes de este Colegiado, la Secretaría Técnica del Comité, oficializó tomar nota de cada una de las determinaciones, por lo que procedió a realizar la presente acta correspondiente a la **Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 2021.**



## DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. **Lectura y en su caso aprobación del orden del día.**
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:
  - A. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:**

A.1. Folio 0001700241021 – RRA 11143/21

- B. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

B.1. Folio 0001700259621  
B.2. Folio 0001700274521  
B.3. Folio 0001700275321  
B.4. Folio 0001700286721  
B.5. Folio 0001700288421  
B.6. Folio 0001700288521  
B.7. Folio 330024621000052  
B.8. Folio 330024621000053

- C. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza o se instruyen a las unidades administrativas a dar respuesta o pronunciarse por la información requerida:**

Sin asuntos en la presente sesión.

- D. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza o se instruyen a las unidades administrativas a dar respuesta:**

D.1. Folio 0001700268821  
D.2. Folio 0001700269021  
D.3. Folio 0001700269121  
D.4. Folio 0001700269521  
D.5. Folio 0001700269621  
D.6. Folio 0001700269721  
D.7. Folio 0001700269921  
D.8. Folio 0001700271121  
D.9. Folio 0001700271221  
D.10. Folio 0001700271321

- E. **Cumplimiento a las resoluciones del INAI:**

E.1. Folio de la solicitud 0001700172921 – RRA 8278/21  
E.2. Folio de la solicitud 0001700152221 – RRD 1093/21





#### IV. Asuntos generales.

➤ Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia. -----

Trigésima Sexta Sesión Ordinaria



## ABREVIATURAS

**FGR** – Fiscalía General de la República.

**OF** – Oficina del C. Fiscal General de la República.

**CA** – Coordinación Administrativa

**OM** – Oficialía Mayor (antes CPA)

**DGCS** – Dirección General de Comunicación Social.

**CFySPC**: Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

**SJAI** – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

**CAIA** – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

**DGALEYN** – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

**FECOR** – Fiscalía Especializada de Control Regional (antes SCRPPA)

**FEMDO** – Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO).

**FECOC** – Fiscalía Especializada de Control Competencial. (Antes SEIDF)

**FECC** – Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción

**FEMDH** – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

**FEVIMTRA** – Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

**FISEL** – Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Antes FEDE)

**FEAI** – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

**FEADLE** – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

**AIC** – Agencia de Investigación Criminal (antes CMI)

**CENAPI** – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

**PFM** – Policía Federal Ministerial.

**CGSP** – Coordinación General de Servicios Periciales.

**OEMASC** – Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

**OIC**: Órgano Interno de Control.

**UTAG** – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

**INAI** – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**LFTAIP** – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**CFPP** – Código Federal de Procedimientos Penales

**CNPP** – Código Nacional de Procedimientos Penales.

**CPEUM** – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.







**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:**

**A.1. Folio de la solicitud 0001700241021 - RRA 11143/21**

La resolución adoptada por el Comité de Transparencia del asunto de mérito se encuentra al final de acta de la presente sesión.

Área con líneas punteadas para el desarrollo del acta.





**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

**B.1. Folio de la solicitud 0001700259621**

<b>Síntesis</b>	Contratos con Balam Seguridad Privada
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-En alcance al RRA 3400/21 que se derivó de la solicitud 0001700040621 se me informó que en 2013 la entonces PGR contrató a la empresa BALAM SEGURIDAD PRIVADA. Solicito que se me brinde el contrato y/o los **contratos que suscribió la PGR con BALAM SEGURIDAD PRIVADA** en 2013." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEAI, OIC y OM.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0636/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida, ello en términos de las **fracciones I, V y XII, artículo 110** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan, que al tenor señalan:

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

I. **Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública** o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

V. **Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

XII. **Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**



Los supuestos anteriores, se concatenan al décimo séptimo, décimo octavo y vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los cuales disponen:

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:**

IV. **Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional;**

VI. **Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional;**

VII. **Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;**

Asimismo, **podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent.**

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.**

**Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.**

Asimismo, **podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.**

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un **vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

En ese contexto, derivado de una armónica interpretación de la normatividad anteriormente citada y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), bajo la precisión de que si bien se





hace referencia a las fracciones del artículo 113 de la Ley General, lo cierto es que dicha disposición es equiparable a lo establecido en el diverso artículo 110 y sus fracciones correspondientes de la Ley Federal; se coligen las siguientes pruebas de daño:

Prueba de daño, correspondiente al artículo 110, fracción I (**especificaciones técnicas del equipo**), de la **LFTAIP**:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Con la divulgación del documento requerido, se obstaculizan las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública y nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia y contrainteligencia de esta Fiscalía General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- II. Prejuicio que supera el interés público: Con la entrega de la documental peticionada, se obstaculiza el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición información de inteligencia y contrainteligencia generada para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, que revela las estrategias y capacidades de esta Fiscalía General utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y así verse afectada la seguridad pública y nacional, traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta representación social federal.
- III. Principio de proporcionalidad: El clasificar la información solicitada se traduce en la salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la seguridad pública y nacional a través de la investigación y persecución de los delitos, encomienda del Ministerio Público de la Federación. Por lo que resulta de mayor relevancia para la sociedad que esta Fiscalía General de la República vele por la seguridad pública y nacional a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información relativa a las técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.

Prueba de daño, correspondiente al artículo 110, fracción V (**datos de identificación de las personas intervinientes**), de la **LFTAIP**:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Dar a conocer datos sobre las personas involucradas en los instrumentos contractuales de referencia, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, incluso las de sus familiares, toda vez que con la publicidad de dichos datos se harían identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información sensible de inteligencia y contrainteligencia utilizada en contra de la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.



- II. Prejuicio que supera el interés público: El divulgar datos de las personas que participaron en los procedimientos de contratación, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, toda vez que serían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional y Pública, o simplemente ser blanco de represalias ya que la información de que se trata, está relacionada con el combate a la delincuencia organizada, en este sentido, el proteger el derecho fundamental de la vida de los involucrados y la de sus familiares, supera el interés particular de conocer la documentación requerida.
- III. Principio de proporcionalidad: El reservar la información relacionada con los datos de las personas que intervinieron en los procesos de contratación, resulta el medio menos restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en una situación de riesgo, por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información.

Prueba de daño, correspondiente al artículo 110, fracción XII (**registros contenidos en una carpeta de investigación**), de la **LFTAIP**:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Revelar la información inmersa en una carpeta de investigación perjudicaría las facultades de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; por lo que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación; y la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño..
- II. Perjuicio que supera el interés público: Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la **CPEUM**, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; proporcionar información inmersa en indagatorias, vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y persecución de los delitos.





Hacer públicos los elementos con los que cuenta el agente Ministerio Público de la Federación podrían alterar los medios de prueba o cuerpo del delito, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, lo anterior tomando en consideración que esta Institución tiene como finalidad garantizar el estado de derecho.

- III. Principio de proporcionalidad: El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.

La reserva de la información requerida por el solicitante es acorde con el principio de proporcionalidad estricta en virtud de que en la medida en que se restringe el derecho a conocer la información inmersa en la carpeta de investigación, en esa misma medida se satisface el interés general de no obstruir las tareas de persecución de las conductas irregulares y/o ilícitas.

Además, dicha reserva constituye el medio menos restrictivo para lograr el fin que se persigue, pues no existe alguna otra acción que satisfaga simultáneamente el interés público de persecución de las conductas irregulares y/o ilícitas, por un lado, y por otro el derecho al acceso a la información.

Entonces, clasificar la información como reservada conlleva una afectación mínima al principio de transparencia y publicidad, ya que no es posible entregar la información solicitada, en virtud de que este hecho se realiza para proteger la investigación y persecución de conductas ilícitas.

Así las cosas, **resulta de alta relevancia enfatizar** en el impedimento legal para los servidores públicos de esta institución de revelar o hacer pública la información que, por mandato expreso de ley, se encuentra estrictamente reservada, esto, pues del análisis al contenido del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales (**CNPP**) se desprende una imposibilidad jurídica de hacer público cualquier registro de las investigaciones que se encuentren tramitadas ante el Ministerio Público, a decir:

Artículo 218. **Reserva de los actos de investigación**

**Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.**

...  
**Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad**



con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

En esa consideración, se precisa que **el contrato de referencia se encuentra contenido en una carpeta de investigación en trámite**, situación por la cual actualiza la hipótesis de información clasificada como reservada establecida en la fracción XII, artículo 110 de la **LFTAIP**, en concatenación con el trigésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 218 del **CNPP**.

adicionalmente, otro impedimento jurídico que tiene esta autoridad para ventilar la información en comento se encuentra previsto en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal (**CPF**), que dispone:

Artículo 225. **Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:**

XXVIII.- **Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en averiguación previa o en un proceso penal** y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales;

**A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI y XXXVII se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.**

Bajo este contexto el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación del Ministerio Público, como en este caso en una carpeta de investigación, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia, por ende, se haría acreedor a las sanciones penales que en derecho correspondan.





**B.2. Folio de la solicitud 0001700274521**

<b>Síntesis</b>	Investigación en contra de terceras personas
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

*"Expediente completo o fichas que contengan información de o relativa a César Germán Yáñez Muñoz y/o César Yáñez Muñoz y/o Germán Yáñez Muñoz y/o El Hermano Pedro y/o Hermano Pedro*

*En todos los casos en el periodo histórico que va de 1957 a 1976, y, considerando su antigüedad y que los actores mencionados en dichos documentos han fallecido hace ya un periodo de tiempo razonable, se solicita, en la medida de lo posible, la versión completa sin testar para fines de investigación histórica." (Sic)*

**Datos complementarios:**

*"En el AGN en los archivos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y/o Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y/o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)*

*En SeDeNa en su archivo histórico y/o lo correspondiente a Inteligencia Militar*

*En la FGR en el archivo histórico de la extinta PGR correspondiente a carpetas de investigación (judicializadas o no) y/o a la Policía Judicial*

*En todos los casos en el periodo histórico que va de 1957 a 1976, y, considerando su antigüedad y que los actores mencionados en dichos documentos han fallecido hace ya un periodo de tiempo razonable, se solicita, en la medida de lo posible, la versión completa sin testar para fines de investigación histórica" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0637/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por



unanimidad **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento respecto de afirmar o negar que la persona interés del peticionario, se encuentre dentro de alguna investigación en cualquier calidad que este tenga, ya sea en su calidad de víctima, ofendido y/o imputado, en términos del **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sanción condenatoria firme o sanción firme, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. *La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;*

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.**

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. *La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*
- III. *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de





responsabilidades administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)*

*Décima Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tribunales Colegiados de Circuito*

*160425 1 de 3*

*Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.*

*Tesis Aislada*

*Novena Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.*

*Tomo: XIV, Septiembre de 2001*

*Tesis: I.3o.C.244 C*

*Página: 1309*



**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la





*protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

*I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



**B.3. Folio de la solicitud 0001700275321**

<b>Síntesis</b>	Investigación en contra de terceras personas
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

"Número de averiguaciones o carpetas de investigación abiertas sobre los siguientes funcionarios públicos que laboraron en el Estado mexicano: Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CAIA, FECOC, FECOR, FEMDO, FEMDH, FISEL, FEMCC y FEAI.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0638/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en contra de las personas citadas en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sanción condenatoria firme o sanción firme, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

**TÍTULO CUARTO**





INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidades administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036



**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos





de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. -----



**B.4. Folio de la solicitud 0001700286721**

<b>Síntesis</b>	Expediente A.P. PGR/DDF/SZN-IX/993/2013
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Deseo una copia del **expediente A.P. PGR/DDF/SZN-IX/993/2013** radicada en:  
Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo.  
Delegación Distrito Federal.  
Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Norte.  
Mesa de Trámite VIII en Auxilio de la Mesa IX." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR**.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0639/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la **FECOR** respecto de la averiguación previa aludida por el peticionario, en virtud que esta se **encuentra en trámite**, en términos de la **fracción XII, del artículo 110** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**





Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguientes pruebas de daño.

**Artículo 110, fracción XII:**

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa se menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
- II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
- III. La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del



interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Fiscalía General de la República, consistentes en la investigación y persecución de delitos, permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la averiguación previa correspondiente.

Área con líneas de puntos para redacción.

*[Firmas manuscritas]*





**B.5. Folio de la solicitud 0001700288421**

<b>Síntesis</b>	Expediente de investigación relacionado con el caso de "La Bartolina", en Matamoros, Tamaulipas
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

*"Solicito se me informe lo siguiente en archivo editable o excel, sobre el sitio de cremación y/o fosa clandestina conocido como "La Bartolina", en Matamoros, Tamaulipas:*

- a) Fecha de su descubrimiento*
- b) De qué año a qué año estuvo en operación el lugar*
- c) Se informe si fue un sitio de cremación de cuerpos o de enterramiento de cuerpos o de ambos*
- d) Qué restos humanos no cremados han sido exhumados del lugar, especificando: cuántos cuerpos, cuántas secciones humanas, cuántos restos óseos.*
- e) A cuántas víctimas corresponden estos restos del inciso anterior (cuántas mujeres y cuántos hombres)*
- f) Qué restos humanos sí cremados/calcinados han sido exhumados del lugar, especificando: cuántos cuerpos, cuántas secciones humanas, cuántos restos óseos calcinados.*
- g) A cuántas víctimas corresponden estos restos del inciso anterior (cuántas mujeres y cuántos hombres)*
- h) Con respecto a todos los restos óseos calcinados extraídos del sitio ¿qué peso total suman?*
- i) Se informe si es verdad que los restos óseos calcinados extraídos del sitio pesan al menos 500 kg.*
- j) Qué grupo delictivo operaba el sitio*
- k) Qué superficie total tiene el sitio*
- l) Qué superficie ya fue explorada en busca de restos humanos y qué superficie aún no ha sido explorada.*
- m) Qué métodos y herramientas tecnológicas se utilizaron para explorar la superficie ya explorada en busca de restos humanos.*
- n) Desde qué fecha comenzaron los trabajos de exploración del sitio en busca de restos humanos, qué porcentaje de avance presentan estas labores y en qué fecha concluirán.*
- o) De todas las víctimas extraídas del sitio cuántas ya fueron identificadas y cuántas aún no.*
- p) Qué institución se hace cargo de la exploración del sitio en busca de restos humanos y de la identificación de las víctimas extraídas." (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial



de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **AIC y FEMDH.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0640/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la información conforme a lo señalado por la FEMDH, de conformidad con el **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...  
**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

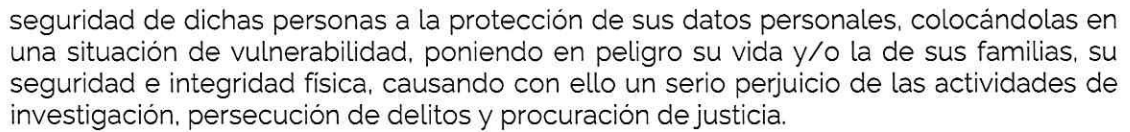
**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguientes pruebas de daño.

**Artículo 110, fracción XII:**

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad nacional puesto que la indagatoria se encuentra inmersa información sensible, entre las que se encuentran datos para acreditar el delito, la probable responsabilidad de él o los iniciados, y la identidad de víctimas directas e indirectas, así como de terceras personas que han intervenido en la investigación, por lo que conceder a dicha petición quebrantaría la





- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, en este sentido, toda vez que el ejercicio particular del derecho a la información pública no es absoluto y encuentra sus límites al confrontarse con el interés público, se estima que otorgar la información solicitada por el requirente, ocasionaría un severo perjuicio para la persecución del delito y la procuración de justicia, así como para la vida, seguridad, salud e integridad de las personas que intervienen en un en la investigación.
- III. La limitación sé de cual principio de proporcionalidad y representa el medio menos destructivo disponible para evitar el perjuicio.

La limitación al derecho de acceso a la información se justifica en virtud de evitar poner en riesgo la salud, seguridad o la vida de las personas que intervienen en la investigación y/o de sus familias, así como de obstruir la persecución de los delitos que se investigan, cuya finalidad corresponde a una debida procuración de justicia por parte de la institución, lo cual resulta de gran beneficio de la sociedad, pues con ellos se alcanza el fin pretendido por el Ministerio público de la Federación, consistente en ejercer sus atribuciones correspondientes a la satisfacción del interés social y protección de los bienes jurídicos. Asimismo, la proporcionalidad exige un juicio de ponderación donde se ha de valorar la gravedad de otorgar la información requerida por el particular, y el daño que produciría al poner en peligro la salud, seguridad o la vida de una o varias personas, imposibilitando la persecución de los delitos del orden federal con su entrega, hecho que, en el caso que nos ocupa, impediría una debida procuración de justicia, de ahí la imposibilidad jurídica de divulgar la información que legalmente es considerada como reservada, en tanto que los derechos de la libertad, integral personal y vida, sin olvidar la persecución de los delitos tiene un mayor peso.



**B.6. Folio de la solicitud 0001700288521**

<b>Síntesis</b>	Información relacionada con el expediente de investigación relacionado con el caso de "La Bartolina", en Matamoros, Tamaulipas
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito se me informe lo siguiente en archivo editable o excel, sobre el sitio de cremación y/o fosa clandestina conocido como "La Bartolina", en Matamoros, Tamaulipas:

a) Qué averiguaciones previas y/o carpetas de investigación se han abierto relacionadas con la operación de este sitio, y se precise por cada una:

**i. Clave del expediente**

ii. Se informe si es averiguación o carpeta de investigación

iii. Fecha de apertura

iv. Estatus jurídico actual del expediente

v. Delitos investigados

vi. Qué institución específica lleva el expediente

**vii. Cantidad de detenidos (precisando su estatus jurídico actual, si ya fueron liberados, y de haber sido sentenciados se informe si fue absolutoria o condenatoria la sentencia)." (Sic)**

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **AIC y FEMDH.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0641/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de **los puntos i y vii** de la solicitud, de conformidad con el **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:





**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguientes pruebas de daño.

**Artículo 110, fracción XII:**

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad nacional puesto que la indagatoria se encuentra inmersa información sensible, entre las que se encuentran datos para acreditar el delito, la probable responsabilidad de él o los iniciados, y la identidad de víctimas directas e indirectas, así como de terceras personas que han intervenido en la investigación, por lo que conceder a dicha petición quebrantaría la seguridad de dichas personas a la protección de sus datos personales, colocándolas en una situación de vulnerabilidad, poniendo en peligro su vida y/o la de sus familias, su seguridad e integridad física, causando con ello un serio perjuicio de las actividades de investigación, persecución de delitos y procuración de justicia.
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de qué se difunda, en este sentido, toda vez que el ejercicio particular del derecho a la información pública no es absoluto y encuentra sus límites al confrontarse con el interés público, se estima que otorgar la información solicitada por el requirente, ocasionaría un severo perjuicio para la persecución del delito y la procuración de justicia, así como para la vida, seguridad, salud e integridad de las personas que intervienen en un en la investigación.
- III. La limitación sé de cual principio de proporcionalidad y representa el medio menos destructivo disponible para evitar el perjuicio.



La limitación al derecho de acceso a la información se justifica en virtud de evitar poner en riesgo la salud, seguridad o la vida de las personas que intervienen en la investigación y/o de sus familias, así como de obstruir la persecución de los delitos que se investigan, cuya finalidad corresponde a una debida procuración de justicia por parte de la institución, lo cual resulta de gran beneficio de la sociedad, pues con ellos se alcanza el fin pretendido por el Ministerio público de la Federación, consistente en ejercer sus atribuciones correspondientes a la satisfacción del interés social y protección de los bienes jurídicos. Asimismo, la proporcionalidad exige un juicio de ponderación donde se ha de valorar la gravedad de otorgar la información requerida por el particular, y el daño que produciría al poner en peligro la salud, seguridad o la vida de una o varias personas, imposibilitando la persecución de los delitos del orden federal con su entrega, hecho que, en el caso que nos ocupa, impediría una debida procuración de justicia, de ahí la imposibilidad jurídica de divulgar la información que legalmente es considerada como reservada, en tanto que los derechos de la libertad, integral personal y vida, sin olvidar la persecución de los delitos tiene un mayor peso.





**B.7. Folio de la solicitud 330024621000052**

<b>Síntesis</b>	Investigación en contra de terceras personas morales
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

*"Solicito **conocer si se aseguraron pipas, furgones, vagones de ferrocarril y/o cualquier otro medio de transporte con combustible ya sea gasolina o diesel, desde 2017 a la fecha, relacionadas con la empresa ENERGEX o presuntamente relacionada con la empresa ENERGEX, su representante legal o propietario. Favor de especificar: 1. Sitio donde ocurrió el aseguramiento, 2. fecha donde ocurrió el aseguramiento, 3. cantidad estimada de combustible 4. si se trató de pipas, vagones, furgones o qué medio de transporte, 5. Si se realizó o no una denuncia penal, 6. número de personas involucradas en los hechos, 7. Si hubo o no detenidos y cuántos, 8. Cuál es el estatus de la investigación, 9 número de expediente o causa penal, 10. Lugar donde radica.***

*De contener información reservada, favor de enviar versión pública. De requerirse algún pago, generar el recibo por el concepto de copia simple y sin gastos de envío." (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0642/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **confidencialidad** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de carpetas de investigación en contra de la persona moral citada en la petición; ello conforme a lo previsto en el **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas físicas o **morales** que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada



con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en **el artículo 113, fracción III** de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

**Cuadragésimo.** En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física **o moral** identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.





Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**CAPÍTULO II**  
**DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)  
Décima Época  
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
160425 1 de 3  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el*



daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.30.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LXX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho

a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se





sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

*I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional en los términos señalados en este Código.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona física o **moral** identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



**B.8. Folio de la solicitud 330024621000053**

<b>Síntesis</b>	Investigación en contra de terceras personas morales
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

**"Solicito conocer si se aseguraron pipas, furgones, vagones de ferrocarril y/o cualquier otro medio de transporte con combustible ya sea gasolina o diesel, desde 2017 a la fecha, relacionadas con la empresa NEXOIL o presuntamente relacionada con la empresa NEXOIL. Favor de especificar: 1. Sitio donde ocurrió el aseguramiento, 2. fecha donde ocurrió el aseguramiento, 3. cantidad estimada de combustible 4. si se trató de pipas, vagones, furgones o qué medio de transporte, 5. Si se realizó o no una denuncia penal, 6. número de personas involucradas en los hechos, 7. Si hubo o no detenidos y cuántos, 8. Cuál es el estatus de la investigación, 9 número de expediente o causa penal, 10. Lugar donde radica. De contener información reservada, favor de enviar versión pública. De requerirse algún pago, generar el recibo por el concepto de copia simple y sin gastos de envío." (Sic)**

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0643/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **confidencialidad** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de carpetas de investigación en contra de la persona moral citada en la petición; ello conforme a lo previsto en el **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP.

Toda vez que en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas físicas o **morales** que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada





con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en **el artículo 113, fracción III** de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

**III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

**Cuadragésimo.** En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física **o moral** identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.



Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**CAPÍTULO II**  
**DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.30.C. J/71 (ga.)  
Décima Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
160425 1 de 3  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el*





daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.30.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se



sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

*I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona física o **moral** identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.





Sin asuntos en la presente sesión.

[illegible]



**D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0644/2021:**

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP.

- D.1. Folio 0001700268821
- D.2. Folio 0001700269021
- D.3. Folio 0001700269121
- D.4. Folio 0001700269521
- D.5. Folio 0001700269621
- D.6. Folio 0001700269721
- D.7. Folio 0001700269921
- D.8. Folio 0001700271121
- D.9. Folio 0001700271221
- D.10. Folio 0001700271321

Lo anterior, de conformidad con los motivos que se expresan en el **Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta** que se despliega en la siguiente página.

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que, dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

**Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta**

DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Folio 0001700268821 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 Solicito se me informe cuántas carpetas de investigación judicializadas se realizaron en el estado de Colima de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y los meses que esté disponible del 2021 por ilícitos relacionados con hidrocarburo; así como el número de personas vinculadas a proceso, sentenciadas, órdenes de aprehensión giradas y cateos que se efectuaron en la misma anualidad. Desglose por municipios.	Solicitada por falta de respuesta de la OM
Folio 0001700269021 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 Solicito copia de la versión pública de las diligencias ministeriales sobre la entrega de 6 millones 800 mil pesos por parte de Norberto N y por instrucciones de Emilio N, a Ricardo N, para que votara a favor de la reforma energética en la Cámara de Diputados. También solicito copia de las diligencias	Solicitada por falta de respuesta de la FECOC





DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
ministeriales sobre los testimonios de los testigos Miguel N y Froylán N, que presenciaron visitas de Ricardo N y otros legisladores a Emilio N en las oficinas de la Dirección General de Pemex. La solicitud está basada en el comunicado dado a conocer por la FGR el 25 de agosto, respecto al caso	
Folio 0001700269121 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 De conformidad con los artículos 6o, 8o y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pacífica y respetuosamente solicito, en formato PDF, copia en versión pública, de la carpeta de investigación abierta en torno al desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, sin que se oculten los nombres de los funcionarios públicos señalados por peculado y ejercicio ilícito del servicio público. , justificación de no pago: El derecho de acceso a la información es gratuito por mandato constitucional.	Solicitada por análisis de respuesta en la <b>UTAG</b>
Folio 0001700269521 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 Favor de informar el número de solicitudes de asistencia jurídica internacional formuladas por la FGR a otros países en relación con la investigación del caso Odebrecht/Emilio Lozoya Austin, durante el periodo comprendido de enero de 2017 hasta septiembre de 2021. Para cada solicitud, favor de indicar lo siguiente Fecha en que se formuló cada solicitud, Nombre y país de la autoridad requerida, Tipo de información solicitada u objeto de la solicitud Estatus de cada petición. El sujeto obligado debe responder la información requerida toda vez que la misma información ya ha sido proporcionada previamente como lo puede comprobar en la solicitud que respondió la dirección general de procedimientos internacionales con número de folio 1700998220, 0001700123619, 1700556019 y 1700130521. GRACIAS. Favor de enviar la solicitud adjunta a la Dirección General de Procedimientos Internacionales.	Solicitada por análisis de respuesta en la <b>UTAG</b>
Folio 0001700269621 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 Solicito copias DIGITALES de la versión pública del expediente de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 en la que aparece como imputado el ciudadano Emilio Lozoya Austin por los delitos de asociación delictuosa operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Este sujeto obligado debe entregar la información toda vez que se trata de un caso de corrupción y de interés público derivado de los presuntos sobornos que la empresa Odebrecht pagó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. En la solicitud con folio 0001700037721 la solicitante requirió la misma información que ahora solicita, misma que en un principio fue reservada por el sujeto obligado. Sin embargo, a través del RRA 3061/21 el INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó a entregar la información requerida. La información es de nuevo solicitada toda vez que la solicitante recibió una respuesta de la FGR, misma que adjunto, en la que el sujeto obligado pone a disposición 81,312 fojas en modalidad de copia certificada a 22 pesos, lo que implicaría un monto a pagar de 1,788,864, mismo que resulta excesivo e imposible de cubrir, por lo que a través de esta nueva	Solicitada por análisis de respuesta en la <b>UTAG</b>





DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>solicitud de información, solicito que la información sea entregada en la modalidad de COPIAS DIGITALES y que la FGR asuma el costo de la digitalización y en su caso de la reproducción toda vez que me encuentro imposibilitada a realizar un pago de semejante naturaleza. De tal manera que este particular solicito la excepción del pago de reproducción debido a circunstancias socioeconómicas ya que el monto requerido representa 14,517 salarios mínimos y a este particular le resulta imposible pagar dicho monto. No omito mencionar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, apenas el 3.7 de la población ingresa más de cinco salarios mínimos al día por mes, por lo que es totalmente desproporcionado y claramente representa un problema para cualquier ciudadano del 96.3 de la población que gana menos de cinco salarios mínimos al día por mes. Por tal motivo, en todo caso que de manera justificada y motivada este sujeto obligado prueba que no es posible hacer una versión pública digital, este particular solicita la exención del pago referida en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. , justificación de no pago: Solicito la excepción del pago de reproducción debido a circunstancias socioeconómicas ya que el monto requerido representa 14,517 salarios mínimos y a este particular le resulta imposible pagar dicho monto. No omito mencionar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, apenas el 3.7 por ciento de la población ingresa más de cinco salarios mínimos al día por mes, por lo que es totalmente desproporcionado y claramente representa un problema para cualquier ciudadano del 96.3 por ciento de la población que gana menos de cinco salarios mínimos al día por mes. Por tal motivo, en todo caso que de manera justificada y motivada este sujeto obligado prueba que no es posible hacer una versión pública digital, este particular solicita la exención del pago referida en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	
<p>Folio 0001700269721 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 Solicito en copia simple y versión pública la siguiente información dirigida a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y los archivos de su antecesora, la FEPADE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Cantidad total de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas, judicializadas, desistidas y con sentencia condenatoria durante los procesos electorales federales 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021.</li><li>-Número de personas que laboraban en la fiscalía electoral (FEDE o FEPADE) durante los procesos electorales antes citados.</li><li>-Número de fiscales o agentes de investigación o equivalente que laboraban en la fiscalía electoral (FEDE o FEPADE) durante los procesos electorales antes citados.</li><li>-Número de carpetas iniciadas por tipo penal especificado en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.</li></ul>	<p>Solicitada por falta de respuesta de la <b>FEDE</b></p>
<p>Folio 0001700269921 Fecha de ampliación de plazo 07/10/2021 Solicito copias DIGITALES de la versión pública del expediente de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 en la que aparece como imputado el ciudadano Emilio Lozoya Austin por el uso indebido de</p>	<p>Solicitada por análisis de respuesta en la <b>UTAG</b></p>





DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este sujeto obligado debe entregar la información toda vez que se trata de un caso de corrupción y de interés público relacionado con un exfuncionario público de alto nivel. En la solicitud con folio 0001700037821 la solicitante requirió la misma información que ahora solicita, misma que en un principio fue reservada por el sujeto obligado. Sin embargo, a través del RRA 3063/21 el INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó a entregar la información requerida. La información es de nuevo solicitada toda vez que la solicitante recibió una respuesta de la FGR, misma que adjunto, en la que el sujeto obligado pone a disposición 52,335 fojas en modalidad de copias simples (1 peso) o copias certificadas, lo que implicaría un monto a pagar de 52,335 pesos, mismo que resulta excesivo e imposible de cubrir, por lo que a través de esta nueva solicitud de información, solicito que la información sea entregada en la modalidad de COPIAS DIGITALES y que la FGR asuma el costo de la digitalización y en su caso de la reproducción toda vez que me encuentro imposibilitada a realizar un pago de semejante naturaleza. De tal manera que este particular solicita la excepción del pago de reproducción debido a circunstancias socioeconómicas ya que el monto requerido representa 425 salarios mínimos y a este particular le resulta imposible pagar dicho monto. No omito mencionar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, apenas el 3.7 de la población ingresa más de cinco salarios mínimos al día por mes, por lo que es totalmente desproporcionado y claramente representa un problema para cualquier ciudadano del 96.3 de la población que gana menos de cinco salarios mínimos al día por mes. Por tal motivo, en todo caso que de manera justificada y motivada este sujeto obligado prueba que no es posible hacer una versión pública digital, este particular solicita la exención del pago referida en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. , justificación de no pago: Solicito la excepción del pago de reproducción debido a circunstancias socioeconómicas ya que el monto requerido representa 425 salarios mínimos y a este particular le resulta imposible pagar dicho monto. No omito mencionar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, apenas el 3.7 por ciento de la población ingresa más de cinco salarios mínimos al día por mes, por lo que es totalmente desproporcionado y claramente representa un problema para cualquier ciudadano del 96.3 por ciento de la población que gana menos de cinco salarios mínimos al día por mes. Por tal motivo, en todo caso que de manera justificada y motivada este sujeto obligado prueba que no es posible hacer una versión pública digital, este particular solicita la exención del pago referida en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Folio 0001700271121 Fecha de ampliación de plazo 11/10/2021 Buenas tardes. Considerando que el plazo para emitir el nuevo Estatuto Orgánico del INACIPE y el programa de liquidación de su personal, previsto en el párrafo sexto del artículo Quinto Transitorio de la Ley de la Fiscalía (publicada en el DOF el 20 de mayo de 2021), venció el 19 de julio de 2021,</p>	<p>Solicitada por falta de respuesta de la OM</p>





DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>solicito: 1. Qué va a pasar con el personal del INACIPE. ¿Ya se tiene previsto su transición a la FGR? Pido la información para base, confianza y lo que el INACIPE denomina honorarios (que más bien son contratos de adjudicación directa). 2. ¿En qué consistirá la liquidación al personal? ¿Se tiene previsto otorgarles alguna indemnización? 3. Con cargo a qué presupuesto se pagarán las liquidaciones al personal. Muchas gracias.</p> <p>Folio 0001700271221 Fecha de ampliación de plazo 11/10/2021 Buenas tardes. Considerando que el plazo de 60 días naturales previsto en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de la Fiscalía (DOF.20.05.2021) para emitir el nuevo Estatuto Orgánico del INACIPE venció el 19 de julio de 2021, además de que el 8 de julio de 2021 se publicó en el DOF el ACUERDO A/001/2021 por el que se establece la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales y su artículo Tercero Transitorio dispuso que la Secretaría Técnica deberá realizar las gestiones conducentes a fin de que se celebre a la brevedad la primera sesión de la Junta de Gobierno, solicito: 1. El acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada con motivo del Acuerdo A/001/2021, debidamente formalizada por sus miembros. 2. Saber si se pretende conservar la estructura orgánica del INACIPE como se encuentra actualmente. 3. El proyecto de Estatuto Orgánico del INACIPE. Muchas gracias.</p>	<p>Solicitada por análisis de respuesta en la <b>UTAG</b></p>
<p>Folio 0001700271321 Fecha de ampliación de plazo 08/10/2021 Se anexa solicitud en archivo de Word. ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA P R E S E N T E. NAOMI ESTEFANIA CABADA LÓPEZ, por propio derecho, señalando como medio de notificación el correo electrónico: pnt.solicitud@gmail.com Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar lo siguiente: 1. Copia de la versión pública de la carpeta de investigación derivada de los hechos que tuvieron lugar el 3 de mayo del año en curso en el tramo elevado de la Línea 12, misma en la que se investigan los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado en contra de servidores o ex servidores públicos de la Ciudad de México. Lo anterior se realiza en el marco de un Estado de Derecho que debe respetar el derecho a la información, y de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece: Artículo 112. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Por lo cual, lo aquí peticionado no vulnera ningún supuesto de confidencialidad. Por lo anteriormente expuesto, a usted, atentamente pido se sirva: ÚNICO. - Informar de manera oportuna lo peticionado a los medios de notificación expuestos en el cuerpo del presente escrito. NAOMI ESTEFANÍA CABADA LÓPEZ</p>	<p>Solicitada por análisis de respuesta en la <b>UTAG</b></p>





E.1. Folio de la solicitud 0001700172921 – RRA 8278/21  
E.2. Folio de la solicitud 0001700152221 – RRD 1093/21  
E.3. Folio de la solicitud 0001700158121 – RRA 9199/21

La resolución adoptada por el Comité de Transparencia para cada asunto se encuentra al final del acta de la presente sesión.







Tomando la votación de cada uno de los integrantes del Colegiado de Transparencia para cada uno de los asuntos de conformidad con lo que se plasmó en la presente acta, se da por terminada la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria electrónica del año 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

**INTEGRANTES**



**Lcda. Adi Loza Barrera.**

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la  
presidente del Comité de Transparencia.




**Lic. Carlos Guerrero Ruíz**

Suplente del Director General de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
representante del área coordinadora de  
archivos



**Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina**

Suplente del Titular del Órgano  
Interno de Control



**Lcda. Gabriela Santillán García.**

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**

**Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.**

Director de Acceso a la Información  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Vo. Bo.**



---

# FGR

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

---

**COMITÉ  
DE TRANSPARENCIA<sup>1</sup>**

**TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN  
ORDINARIA 2021  
5 DE OCTUBRE DE 2021**

---

<sup>1</sup> En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.





**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencial de la información solicitada:**

**A.1. Folio de la solicitud 0001700241021 – RRA 11143/21**

<b>Síntesis</b>	Nomenclaturas de averiguaciones previas y carpetas de investigación.
<b>Sentido de la resolución CT:</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Solicitud:**

"CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 0001700191421 REQUIERO EL **NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA RECAIDO EN CADA UNA DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS**, ASÍ COMO CONOCER CUANTAS FUERON PRESENTADAS POR AUTORIDADES COMO COFEPRIS, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SOLO REQUIERO CONOCER CUÁNTAS FUERON INCIADAS POR DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES Y QUÉ INSTANCIAS FUERON, NO QUIERO NINGUN DATO DE PARTICULARES. GRACIAS" (Sic)

**Antecedentes:**

En respuesta inicial se informó al particular que la **OM** refirió que la información de su interés no se encontraba contenida en las bases de datos y sistemas informáticos con los que cuenta, por lo que no fue posible entregar tales nomenclaturas.

Inconforme el particular con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), arguyendo que:

POR ESTA VÍA SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA FGR A LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 0001700241021 , YA QUE DICE NO CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE DÉ RESPUESTA A MI SOLICITUD SIN EMBARGO EN UN SIN NÚMERO DE OCASIONES HA DADO ACCESO A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES Y A LOS DENUNCIANTES CUANDO NO SE TRATA DE PARTICULARES SINO DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY. SIRVA DE EJEMPLO OTRO CASO: <https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/ines-gomez-mont-fgremite-ficha-roja-esposo>

Ante esa situación, la **UTAG** turnó nuevamente para su atención la presente solicitud a la **OM** quien indicó que la FECOR, la FECCO y la FEMDO, podrían resultar las unidades administrativas competentes para pronunciarse respecto a la entrega de tal información.



Consecuentemente, tras haber efectuado una búsqueda de la información, indicaron que la nomenclatura de los expedientes de investigación requeridos, revisten el carácter de reservada, en términos del **artículo 110, fracción XII** de la Ley de la materia, hasta por un periodo de cinco años.

Por ello, con el animo de sobreseer el presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado determina lo siguiente:

**ACUERDO  
CT/ACDO/0123/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la clasificación de reserva de las nomenclaturas de los expedientes de investigación requeridos, en el **artículo 110, fracción XII de la LFTAIP**, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...  
**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguientes pruebas de daño.

**Artículo 110, fracción XII:**





- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una indagatoria se menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
- II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
- III. La restricción de proporcionar la información inmersa en los expedientes de investigación relacionados con su solicitud no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Fiscalía General de la República, consistentes en la investigación y persecución de delitos, permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la averiguación previa correspondiente.

Por lo expuesto, se instruye a la **UTAG** hacer del conocimiento la presente resolución a las instancias competentes para los efectos a los que haya lugar y del mismo modo se instruye a que se entregue un ejemplar original de la presente acta al solicitante.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



La presente resolución forma parte de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

**INTEGRANTES**



**Lcda. Adi Loza Barrera.**

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la  
presidente del Comité de Transparencia.



**Lic. Carlos Guerrero Ruíz**

Suplente del Director General de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
representante del área coordinadora de  
archivos



**Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina**

Suplente del Titular del Órgano  
Interno de Control



**Lcda. Gabriela Santillán García.**

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**





---

# FGR

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

---

**COMITÉ  
DE TRANSPARENCIA<sup>1</sup>**

**TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN  
ORDINARIA 2021  
5 DE OCTUBRE DE 2021**

---

<sup>1</sup> En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



## E. Cumplimientos a las resoluciones del INAI:

### E.1. Folio de la solicitud 0001700172921 – RRA 8278/21

#### Síntesis

Versión pública de la carpeta de investigación  
número FED/FECC/FECC - CDMX/0000246/2020

#### Sentido de la resolución CT:

Confirma

#### Rubro

Información clasificada como reservada.

#### Solicitud:

"Por medio de la presente solicitud requiero una copia en **versión pública de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) con número FED/FECC/FECC - CDMX/0000246/2020** como parte de la resolución de la Secretaría de la Función Pública-IMSS número 00641/30.15/0239/2021 con fecha 8 de marzo del 2021, que se dictó en el expediente número PISI-A-NC-DS-0035/2020 mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción en contra de la empresa Levanting Global Servicios LLC, S. A., tal como lo informó la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo del 2021, a través de la "Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Levanting Global Servicios LLC, S.A", y cuyo link de la página electrónica se anexa en esta solicitud de información ([https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5614143&fecha=23/03/2021](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614143&fecha=23/03/2021)).

Cabe destacar que mediante el oficio número CXVII-FECC-097/2020, con fecha del 22 de abril del 2020, firmado por la titular de la Cédula de Investigación Diecisiete FECC de la Fiscalía General de la República, se solicitó al gobierno federal diversa documentación relacionada con el contrato número 20Bl0001 celebrado por el IMSS con la empresa Levanting Global Servicios LLC, S. A., a efecto de integrar la carpeta de investigación FED/FECC/FECC- CDMX/ 0000246.

Ello, derivado de la rescisión del contrato firmado entre el IMSS y la empresa Levanting Global Servicios LLC S.A., con número 20Bl0001\_Levanting Global Serv\_E3\_2020 y código 2347423, con el cual se acordó adquirir 2,500 ventiladores, con fecha 31 de marzo del 2020, derivado de la pandemia por Covid-19, y por el cual el IMSS pagaría unos 93 millones de dólares. La Secretaría de la Función Pública ya emitió una resolución de un proceso sancionador en marzo del 2021: "Causa: La empresa proporcionó información falsa en la celebración del contrato respecto a su experiencia y actuó con dolo al aparentar un domicilio falso", según se lee en la plataforma electrónica de Función Pública sobre el Directorio de proveedores y contratistas sancionados. La FGR ya abrió una carpeta de investigación, lo cual ahora se solicita una copia en versión pública de ello" (Sic)

#### Antecedentes:

En respuesta inicial, la **Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC)** señaló que la información requerida podría formar parte de carpetas de investigación a cargo de esa Fiscalía, las cuales tienen el carácter de reservadas, tal y como lo dispone el





**artículo 218** del *Código Nacional de Procedimientos Penales* y **110, fracción XII** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en relación con el numeral 113, fracción I de ese ordenamiento legal.

Inconforme con la respuesta otorgada, el particular interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), arguyendo que:

**"Acto que se Recurre y Puntos Petitorios:**

*La negativa de la FGR a proporcionar una versión pública del archivo.*

**Otros Elementos a someter:**

*El caso es de interés público, ya que se dio en un contexto de emergencia sanitaria nacional." (sic)*

En consecuencia, el INAI tras un análisis al caso resolvió lo siguiente:

*"Por tanto, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera que lo procedente es **MODIFICAR** la respuesta emitida por la **Fiscalía General de la República**, e instruirle que:*

- ***Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la clasificación con carácter de reservada, la información requerida, en términos del artículo 110, fracción XII, en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de 5 años, de conformidad a lo determinado por esta Autoridad; y proporcione el Acta respectiva en donde el Comité confirme tal determinación, y misma en la que se abunde en la fundamentación y motivación de la reserva, esto es, debiendo realizar la prueba de daño correspondiente, y la cual, deberá ser notificada al particular; todo lo anterior, conforme al procedimiento previsto en la Ley en la materia. Ello, a fin de dotar de plena certeza jurídica al recurrente sobre la reserva de la información. [...]" (sic)***

En acato a la instrucción, la **FEMCC** indicó que la información requerida actualiza la clasificación de reservada de la información requerida, en términos del artículo 110, fracción XII, en relación con el artículo 218 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, por un periodo de 5 años, proporcionando la prueba de daño correspondiente.

**Determinación del Comité de Transparencia:**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0124/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la clasificación con carácter de reservada de la información requerida, en términos del **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, en relación con el artículo 218 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, por un periodo de 5 años

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:



**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** *Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

**XII.** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y*

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** *De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.*

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguientes pruebas de daño.

**Artículo 110, fracción XII:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Revelar la información inmersa en una carpeta se expondrían las investigaciones del Ministerio Público de la Federación. lo que perjudicaría sus facultades de reacción e investigación, afectaría las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia y disminuiría la capacidad para llevar a cabo diligencias y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. De este modo, se disminuiría la eficacia de los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente, la vinculación a proceso y, con ello, la reparación del daño.
- II. **Perjuicio que supera el interés público:** La clasificación de la información atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la CPEUM a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, la clasificación de la información favorecería el interés general que se protege con la procuración de justicia, respecto el interés de un particular.







La presente resolución forma parte de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

**INTEGRANTES**



**Lcda. Adi Loza Barrera.**

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la  
presidente del Comité de Transparencia.



**Lic. Carlos Guerrero Ruíz**

Suplente del Director General de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
representante del área coordinadora de  
archivos



**Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina**

Suplente del Titular del Órgano  
Interno de Control



**Lcda. Gabriela Santillán García.**

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**





---

# FGR

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

---

**COMITÉ  
DE TRANSPARENCIA<sup>1</sup>**

**TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN  
ORDINARIA 2021  
5 DE OCTUBRE DE 2021**

---

<sup>1</sup> En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



**E. Cumplimientos a las resoluciones del INAI:**

**E.3. Folio de la solicitud 0001700158121 – RRA 9199/21**

<b>Síntesis</b>	Caso de los turistas mexicanos que fueron atacados en Egipto el 13 de septiembre de 2015
<b>Sentido de la resolución CT:</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información

**Solicitud:**

*"Pido se me informe lo siguiente en archivo editable, sobre el caso de los turistas mexicanos que fueron atacados en Egipto el 13 de septiembre de 2015, lo que causó la muerte de ocho de ellos:*  
*1 Qué averiguaciones previas y carpetas de investigación emprendió la FGR por este suceso y se informe por cada una:*

- a) Fecha de apertura
- b) Clave de la averiguación o carpeta de investigación
- c) Por qué delitos se abrió
- d) Qué área de la FGR lleva el caso
- e) En qué fase se encuentra
- f) Si se archivó en qué fecha se archivó
- g) Cantidad de detenidos, de consignados, de vinculados a proceso, de imputados y de sentenciados (condenatoria o absolutoriamente).

*2 Se me informe qué procedimientos jurídicos ha interpuesto la FGR ante el Gobierno de Egipto e instancias internacionales para que haya sancionados por esos hechos, y para que se repare el daño a las víctimas, precisando por cada procedimiento:*

- a) Tipo de procedimiento
- b) Ante qué instancia se presentó
- c) Fecha de la presentación
- d) En qué etapa se encuentra
- e) Fecha de resolución
- f) En qué consistió la resolución (nombre y cargo de sancionados, qué sanción se impuso y cuándo) (o qué reparación del daño se obtuvo por cada víctima).

*3 Sobre lo ocurrido en instituciones judiciales de Egipto.*

*Por cada Corte y/o Juzgado donde se hayan desahogado juicios del caso, y considerando todas las instancias (primeras, segundas y subsecuentes) y las apelaciones, se me informe:*

- a) Nombre de la Corte y/o Juzgado donde se realizó el juicio
- b) Fecha de inicio y resolución del juicio
- c) Tipo de juicio y materia legal
- d) Se informe si es primera instancia, apelación o qué fase.
- e) Nombres y cargos (gubernamentales o privados) de los imputados, y por cada uno se informe:
  - i. Si se le halló culpable o inocente
  - ii. De qué delitos





iii. *Condena impuesta*

f) *Nombre y puesto de quién estuvo a cargo de la defensa de las víctimas mexicanas y se informe si es ciudadano particular o funcionario del Gobierno de México*

*4 Sobre lo ocurrido en instituciones internacionales.*

*Por cada Corte y/o Juzgado donde se hayan desahogado juicios del caso, y considerando todas las instancias (primeras, segundas y subsecuentes) y las apelaciones, se me informe:*

a) *Nombre de la Corte y/o Juzgado donde se realizó el juicio*

b) *Fecha de inicio y resolución del juicio*

c) *Tipo de juicio y materia legal*

d) *Se informe si es primera instancia, apelación o qué fase.*

e) *Nombres y cargos (gubernamentales o privados) de los imputados, y por cada uno se informe:*

i. *Si se le halló culpable o inocente*

ii. *De qué delitos*

iii. *Condena impuesta*

f) *Nombre y puesto de quién estuvo a cargo de la defensa de las víctimas mexicanas y se informe si es ciudadanos particular o funcionario del Gobierno de México*

*5 Se me informe en síntesis, si ya existen personas sancionadas por el Gobierno de Egipto o instancias internacionales por esos hechos, precisando por cada uno:*

a) *Nombre y cargo*

b) *Pena impuesta*

c) *Fecha en que se resolvió la condena*

d) *Institución que impuso la pena*

*6 Se me informe si ya se les reparó el daño a las víctimas, precisando por cada víctima:*

a) *Nombre de la víctima*

b) *En qué consistió la reparación del daño*

c) *Si fue económica se informe el monto*

d) *Qué instancia o institución pagó la reparación del daño económico*

e) *Fecha en que se pagó la reparación económica*

f) *Qué instancia o institución gestionó y logró que se pagara dicha reparación del daño.* (Si)

#### **Antecedentes:**

En respuesta inicial, se informó al particular que la presente solicitud se turnó a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías (CAIA) quien proporcionó los datos requeridos en el **punto 1**, además de informar que no es competente para conocer de la información requerida en el **punto 2**, siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la encargada, y respecto al **punto 6** proporcionó diversos comunicados oficiales.

En cuanto a los **puntos 3, 4 y 5**, precisó la información con la que se cuenta, es considerada **reservada** al encontrarse inmersa en un **expediente en trámite**; en términos del **artículo 110, fracciones II** (pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales), **III** (se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional), **V** (pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física), **VII** (obstruya la prevención o persecución de los delitos) y **XII** (se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley



señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público), así como **confidencial** en términos del artículo **113, fracción I** de la **LFTAIP**.

Inconforme con la respuesta otorgada, el particular interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (**INAI**), arguyendo que:

*Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, para recurrir exclusivamente todos los elementos que fueron clasificados como información reservada y/o confidencial, pues dicha información debe considerarse de libre acceso, al tratarse de un evento que tuvo amplia difusión mediática.*

*En general las respuestas del sujeto obligado son satisfactorias, por lo que solo estoy recurriendo la clasificación que se hizo de información como reservada y confidencial.*

*Recurro, por lo tanto, exclusivamente la clasificación que aplicó el sujeto obligado para declarar como reservada y confidencial distintos elementos solicitados, aunque el sujeto obligado no es claro en precisar qué elementos son los que está clasificando como información reservada y confidencial.*

*Considero que al tratarse de un evento que ya tuvo una muy amplia difusión mediática, es posible que se brinde toda la información solicitada sin que se clasifiquen elementos reservados y/o confidenciales, puesto que la publicidad total de la información no entraña ningún daño -puesto que la difusión de la misma ya se ha hecho mediáticamente-.*

*Es por estos motivos que recurro la respuesta, para que se brinde acceso a la información que originalmente fue clasificada como reservada y confidencial.*

Es decir, mediante **recurso de revisión** el particular únicamente se inconformó respecto a la respuesta proporcionada por la **CAIA** a los **puntos 3, 4 y 5** de su solicitud.

En **alegatos** la **CAIA** reiteró la respuesta otorgada a los **puntos 3, 4 y 5**.

En atención a un requerimiento de información adicional notificado por el **INAI**, la **CAIA** manifestó:

- La negociación internacional consiste en la solicitud de asistencia jurídica internacional solicitada a la República Árabe de Egipto, así como el producto obtenido de la misma.
- La relación internacional entre la República Árabe de Egipto y México se puede ver afectada ante la difusión de esta información ya que la misma fue proporcionada en el marco del "Principio de Reciprocidad Internacional".
- En la solicitud de asistencia jurídica internacional efectuada se contiene expresa e inequívocamente la voluntad de ser considerada como confidencial.
- Los nombres y firmas de AMPF son considerados como reservados.
- La información obtenida vía asistencia jurídica internacional forma parte de la averiguación previa UEDE/083/2015.
- Los nombres completos de víctimas directas e indirectas, testigos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, media filiación, nombres y firmas de funcionarios extranjeros, esto es personas físicas identificadas e identificables, son considerados como confidenciales.

Posteriormente, mediante **resolución**, el **INAI** determinó lo siguiente:

*"En consecuencia, se advierte que no resulta procedente la clasificación invocada por la Fiscalía General de la República, respecto a la totalidad del documento que da atención a los requerimientos del particular, por lo que el agravo vertido deviene en **PARCIALMENTE FUNDADO**."*





En virtud de lo anterior, este Instituto considera que, en términos de lo dispuesto en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo procedente es **MODIFICAR** la respuesta otorgada por parte de la **Fiscalía General de la República** y, en consecuencia, se le **instruye** a efecto de que proporcione al hoy recurrente la **versión pública de la sentencia emitida por la autoridad judicial de la República Árabe de Egipto referida en el oficio de desahogo de requerimiento de información adicional**, en la que solo podrá testar los **nombres completos** de víctimas directas e indirectas, testigos e imputados, **domicilios, teléfonos, correos electrónicos, media filiación**, esto, de **personas físicas** identificadas e identificables, con fundamento en el artículo **113, fracción I** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este sentido, **el sujeto obligado deberá proporcionar al hoy recurrente la resolución emitida por su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la clasificación de los datos testados en la versión pública, así como de la inexistencia de la información requerida en el punto 4 de la solicitud y proporcionar a este un tanto del acta correspondiente debidamente signada por todos sus miembros integrantes.**

En relación con lo anterior, el sujeto obligado deberá entregar la información referida al recurrente, a través del medio que señaló para tales efectos o bien, ponerla a su disposición en un sitio de Internet, y comunicar a este último los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública." (Sic.)

En tales razones, la **CAIA** remitió a esta **UTAG** la versión pública de la sentencia emitida por la autoridad judicial de la República Árabe de Egipto, testando datos personales como lo son nombres de personas identificadas e identificables; en términos del **artículo 113 fracción I** de la LFTAIP; misma que asciende a un total de 27 fojas útiles.

#### **Determinación del Comité de Transparencia:**

##### **ACUERDO CT/ACDO/0126/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirmar** la clasificación de confidencialidad respecto a nombres completos de personas identificadas o identificables, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP. A efecto de poner a disposición del particular versión pública de la de la sentencia emitida por la autoridad judicial de la República Árabe de Egipto.

Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento en mención, se procederían a testar los **datos personales** sin necesidad de estar sujeto a temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la **fracción I del artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

##### **ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**



**III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.**

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** y **Cuadragésimo** que establecen lo siguiente:

#### CAPÍTULO VI

#### DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

**II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información,** de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

**III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.**

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

**VI.** Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus lunciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.





En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

*Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.*

En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona **física o moral** identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0126/2021:**







La presente resolución forma parte de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

**INTEGRANTES**

**Lcda. Adi Loza Barrera.**

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la  
presidente del Comité de Transparencia.

**Lic. Carlos Guerrero Ruíz**

Suplente del Director General de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
representante del área coordinadora de  
archivos

**Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina**

Suplente del Titular del Órgano  
Interno de Control

**Lcda. Gabriela Santillán García.**

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**